Bogotá D.C., noviembre de 2023

Señores:

JUEZ DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 2591 DE 1991

ASUNTO: VIOLANCION AL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO, DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE PETICIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACCIONANTE: DIANA MILENA CARDENAS CHAPARRO

ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC Y SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – SDH.

Yo **DIANA MILENA CARDENAS CHAPARRO**, identificada con cédula de ciudadanía No 63.559.014 de Bucaramanga, respetuosamente acudo ante Usted Señor(a) Juez Constitucional para promover ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que usted Señor(a) Juez de control constitucional conceda la protección inmediata de los **Derechos Fundamentales como el Derecho al trabajo en el marco de los Concurso de Méritos, Derecho de petición y Acceso a la Función Pública**, vulnerados y/o amenazados por parte de la Comisión Nacional Del Servicio Civil – CNSC y Secretaría Distrital De Hacienda – SDH, con base en los siguientes:

I- HECHOS

RESUMEN: Presenté prueba escrita en el marco de un concurso público de méritos, en la que actualmente estoy ocupando el segundo puesto en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 6322 del 10 de noviembre de 2021 “*Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer uno (1) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 21, identificado con el Código OPEC No. 137051 en la modalidad abierto del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH, Procesos de Selección 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Convocatoria Distrito Capital 4*”, solicité a la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante petición el día 18 de septiembre de 2023 con radicado No. 2023RE178732 la intervención como autoridad máxima en la administración y vigilancia de la aplicabilidad de listas de elegibles y empleos de carácter temporal, provisional y de Carrera Administrativa en Colombia, para que la Secretaría Distrital de Hacienda en su obligación y debido proceso haga uso de la lista de elegibles conformada en mención, sin obtener respuesta por parte de esta autoridad competente, vulnerando o amenazando así mi derecho fundamental como el trabajo, el acceso a la información Pública, el Derecho de petición y acceso a la función pública. Así mismo el día 17 de junio de 2022 mediante radicado No. 2022ER44853901 solicité a la Secretaría Distrital de Hacienda información para cubrir vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en la convocatoria Distrito capital 4 – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Modalidad abierto, sin respuesta alguna vulnerando o amenazando también mi derecho fundamental como el trabajo, el acceso a la información Pública, el Derecho de petición y el derecho a acceso a la función pública.

Primero: La Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, mediante Acuerdo No. CNSC-20211000000026 del 14 de enero de 2021, convocó a concurso público de méritos para proveer definitivamente uno (1) vacante(s), pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH, *Procesos de Selección 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Convocatoria Distrito Capital 4*.

Segundo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo No. CNSC- 20211000000026 del 14 de enero de 2021, en concordancia con lo previsto en el numeral 4o del artículo 311 de

la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas.

Tercero: De la lista de elegibles conformada y adoptada mediante Resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021 para proveer uno (1) vacante(s) del empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 21, identificado con el Código OPEC No. 137051 en la modalidad abierto del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – SDH, me encuentro actualmente en el puesto número dos (2) en la lista de elegibles.

Cuarto: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la Lista de Elegibles quede en firme, deberán producirse por parte del nominador de la entidad en este caso Secretaría Distrital de Hacienda, en estricto orden de mérito, los nombramientos en periodo de prueba que procedan, en razón al número de vacantes ofertadas.

Quinto: Que el numeral 4 del artículo 31 de la ley 909 del 2004 que fue modificado por el numeral 4 del artículo 6 de la ley 1960 de 2019 hace mención de cubrir las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y también señala sobre cubrir las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.

Sexto: El día 18 de septiembre de 2023 mediante radicado No. 2023RE178732 solicité mediante petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil su intervención sobre la utilización de la lista de elegibles en el marco del numeral 4 del artículo 6 de la ley 1960 de 2019 que modifica al numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para cubrir las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad, en este caso Secretaría Distrital de Hacienda, al encontrarme en el segundo puesto de la lista de elegibles en caso que la primera persona de la lista se haya posesionado en el cargo, de conformidad con las vacantes que deben reportar las entidades a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en este caso por parte, de la Secretaría Distrital de Hacienda, petición que a la fecha no me han dado respuesta y lo cual incumple con los términos señalados en la ley, poniendo en riesgo mi derecho al trabajo al no proceder en el tiempo de vigente de la lista de elegibles conformada.

Séptimo: La Comisión Nacional del Servicio Civil está omitiendo e incumpliendo su deber como entidad que garantiza a través del mérito la utilización de lista de elegibles conformadas y por tanto, en este caso no está administrando ni haciendo vigilancia en el marco del cumplimiento de la Ley 909 de 2004, al no darme respuesta y tomar acciones a la petición del día 18 de septiembre de 2023 de radicado No. 2023RE178732 para que sea utilizada la lista de elegibles conformada mediante Resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021 en la Secretaría Distrital de Hacienda.

Octavo: El día 17 de junio de 2022 mediante radicado No. 2022ER448539O1 solicité mediante petición a la Secretaría Distrital de Hacienda información para para cubrir vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en la convocatoria Distrito capital 4 – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Modalidad abierto, petición a la que no me dieron respuesta y por tanto, también están incumpliendo con los términos señalados en la ley.

Noveno: La Secretaría Distrital de Hacienda está omitiendo u ocultando información respecto a las vacantes definitivas equivalente no convocados en el concurso de méritos que deben surtir con lista de elegibles, lo cual es un incumplimiento a la Ley 909 de 2004 como ley 1960 de 2019 específicamente el numeral 4 del artículo 6, al no darme respuesta y/o tomar acciones a la solicitud.

Décimo: La lista de elegibles conformada mediante Resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021 y en la que me encuentro en segundo lugar, estaría vigente respecto a su firmeza hasta el día 10 de noviembre de 2023, situación que me pone en riesgo de amenaza o vulnerabilidad de mis derechos fundamentales como es el derecho al trabajo, acceso a la información pública, derecho de petición y derecho al acceso a la función pública por parte de las autoridades competentes como son en este caso la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría Distrital de Hacienda.

II- ARGUMENTOS

Los cuales se presentan así: A- Problema Jurídico; B- La procedencia de la acción de tutela; C- carácter constitucional y fundamental de los Derechos al Debido Proceso en Concurso de Méritos, Derecho de petición, Derecho al trabajo, y Acceso a la Función Pública.

A- PROBLEMA JURÍDICO

La Comisión Nacional Del Servicio Civil y la Secretaría Distrital De Hacienda vulneran mis **Derechos Fundamentales como el Debido Proceso en Concurso de Méritos, Derecho de petición, Derecho al trabajo, acceso a la Información Pública y acceso a la función pública**, al no dar cumplimiento al numeral 4 del artículo 31 de la ley 909 del 2004 que fue modificado por el numeral 4 del artículo 6 de la ley 1960 de 2019 al no cubrir vacantes mediante lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 6322 del 10 de noviembre de 2022, del empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 21, identificado con el Código OPEC No. 137051 en la modalidad abierto del Sistema General de Carrera Administrativa y **vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.**

“ARTÍCULO 6. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:

ARTÍCULO 31. El proceso de selección comprende:

(...)

*4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos **se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad**”.* (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, utilizar la lista de elegibles reglamentada por Resolución No. 6322 del 10 de noviembre de 2022, para cubrir empleos de plantas temporales o cargos provisionales que hayan surgido a partir de la firmeza de la lista de elegibles, según artículo 21 de la Ley 909 de 2004:

“ARTÍCULO 21. Empleos de carácter temporal.

(...)

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos”.

Ahora bien, respecto a la solicitud de información realizada a la Comisión Nacional del Servicio Civil como a la Secretaría Distrital de Hacienda para que se surtan vacantes con la lista de elegibles mediante Resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021, en el marco de la Ley 909 de 2004 como Ley 1960 de 2019, donde no me han dado respuesta, se está incumpliendo los

términos señalados frente al derecho de información y acceso a la información pública, ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014 como ley 1755 de 2015 que señala en su artículo 14:

“(…)

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.

B- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la Acción De Tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, se presenta una vulneración de mis derechos fundamentales razón por la cual me encuentro legitimado para presentar la acción de tutela.

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia T-090 de 2013 recordó la procedencia de la **Acción de Tutela contra Actos Administrativos de Concurso de Méritos**; en este sentido la Corporación determinó:

*“(…) la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. **Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.**”* (Resaltado y subrayado para enfatizar).

En este caso invoco la primera subregla de la Corte Constitucional en la medida que como mecanismo transitorio puede evitar un perjuicio irremediable como lo es el vicio de todo el proceso de concurso de méritos.

Requiero de medidas urgentes en la medida que el concurso de méritos se está realizando para ocupar el cargo OPEC No 137051 Profesional Especializado Código 222 Grado 21, o vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad, o cargos provisionales que hayan surgido a partir de la firmeza de la lista de elegibles.

Adicionalmente, en mi caso, es URGENTE adoptar medidas para evitar el perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la fecha próxima de vencimiento de la lista de elegibles en la que me encuentro, la cual sería el 10 de noviembre de 2023, para obtener respuesta y acciones por parte de las entidades competentes, y resolver mi situación de vulneración de derechos fundamentales.

Adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia T-604 de 2011 declaró que:

“Esta corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativas no protegen en igual grado que la tutela, los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, ya que la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo.” (Resaltado para enfatizar).

Por lo tanto, invoco esta jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela en mi caso, y buscar una protección efectiva de mis derechos fundamentales invocados.

C- CARÁCTER CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS

DERECHO AL TRABAJO , PRINCIPIO DE MÉRITOS Y DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MÉRITOS

La Constitución Política de 1991 elevó el derecho al debido proceso administrativo a rango fundamental, motivo por el cual es susceptible de protección por vía de tutela. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 constitucional *“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*.

Así mismo el Consejo de Estado determinó en Sentencia de la Sección Segunda del 16 de febrero del 2012, radicado No. 25000-23-15-000-2011-02706-01 estableció que:

“La Convocatoria constituye la regla del proceso de selección, de manera tal que es vinculante tanto para los concursantes como para la Administración, y por lo tanto, que el cumplimiento de la misma es determinante para establecer qué personas acreditan las calidades y condiciones para los empleos ofertados, de lo contrario, no podría garantizarse que el mérito sea el principio orientador para el acceso, permanencia y ascenso a los cargos públicos.”

Por otro lado la Corte Constitucional en Sentencia C-618 de 2015 mencionó que:

“Ciertamente, el mérito es el criterio que, como regla general, debe presidir el nombramiento o designación de quienes van a desempeñar la función pública” y el concurso es uno de los mecanismos adecuados para evaluar “tanto los factores objetivos como los subjetivos” que reúna el aspirante (...).”

En este orden de ideas la Corte Constitucional determina el mérito como principio constitucional de obligatorio cumplimiento para ingreso, ascenso y retiro de empleo público; en este sentido en Sentencia T-604 de 2013 se mencionó que se deben surtir para el acceso a todos los cargos que se encuentran basados en el mérito las siguientes etapas:

- (i) La convocatoria: fase en la cual se consagran las bases del concurso, es decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como los criterios de ponderación, aspectos que aseguran el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante;*
- (ii) Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas en el concurso cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria para acceder a las pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, antecedentes penales y disciplinarios, experiencia, etc.;*
- (iii) Aplicación de pruebas e instrumentos de selección: a través de estas pruebas se establece la capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, social y física. Y por último;*
- (iv) la elaboración de lista de elegibles: en esta etapa se incluye en lista a los participantes que aprobaron el concurso y que fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido.*

En este sentido, en mi caso la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría Distrital de Hacienda están vulnerando y amenazando mi derecho al trabajo como el principio de mérito al no utilizar la lista de elegibles en la que me encuentro, conformada mediante Resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021 para surtir la vacante ofertada, o vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma entidad, o cargos provisionales que hayan surgido a partir de la firmeza de la lista de elegibles

En cuanto al **debido proceso en concurso de mérito**, la Corte Constitucional en Sentencia T-090 de 2013 mencionó que el concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional (artículo 29 Superior), por lo tanto cualquier vulneración en las etapas del proceso se constituye una violación al derecho fundamental de los participantes, y en este caso en mi derecho fundamental.

Es relevante para el caso en concreto que la Corte en esta misma sentencia menciona que:

“Para cumplir tal deber, la entidad encargada de administrar el concurso de méritos elabora una resolución de convocatoria, la cual contiene no sólo los requisitos que deben reunir los aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso, sino que también debe contener los parámetros según los cuales la misma entidad administrativa debe someterse para realizar las etapas propias del concurso, así como la evaluación y la toma de la decisión que concluye con la elaboración de la lista de elegibles.”

Se concluye que hay una violación evidente al debido proceso que debe llevar a cabalidad las entidades, como es la utilización de listas de elegibles previo a la fecha de vencimiento.

DERECHO DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA

Constitucionalmente en el numeral 7º del artículo 40 de la Carta Política consagra el derecho a *“acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”*, en tal sentido la Corte Constitucional

en Sentencia T-003 de 1992 señaló:

“El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho -genérico- cuál es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa”.

Adicionalmente precisa que:

“Si ello es así, tal protección puede ser reclamada, en casos concretos, mediante el uso del mecanismo de la acción de tutela, concebida precisamente como medio idóneo para asegurar que los derechos trascienden del plano de la ilusión al de la realidad”. (Resaltado para enfatizar).

Como se mencionó anteriormente la Sentencia T-604 de 2013 determinó que la aplicación de pruebas e instrumentos de selección establece la capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública, por lo tanto la Secretaría Distrital de Hacienda y la Comisión Nacional de Servicio Civil deben hacer uso de la lista de elegibles conformada para proveer las vacantes en los términos señalados por la ley mencionada 909 de 2004.

Por otro lado es relevante para el caso que el Señor(a) Juez analice lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia **SU-339 de 2011** en cuanto al acceso a la función pública menciona que en sede de tutela corresponde en principio, establecer si en el caso concreto, a

una persona le ha sido desconocido un derecho subjetivo de acceso a un cargo público determinado, es decir, *prima facie* no resulta suficiente la norma constitucional, sino que ésta ha de ser completada por disposiciones legales relativas al cumplimiento de condiciones para el acceso al cargo y su permanencia.

• DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO

La Corte Constitucional en Sentencia C-228 de 2014 determina la necesidad de aplicar una serie de principios específicos aplicables a cualquier forma de acceso, selección o ingreso a la función pública ha sido reconocida a nivel internacional en diversos tratados suscritos y ratificados por Colombia:

- El numeral segundo del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- El numeral 1º del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de acceso a cargos públicos, en condiciones de igualdad de oportunidades.

Así mismo el artículo 4º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dispone lo siguiente:

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:(...) j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”

Por otro lado el artículo 7 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción exige a los Estados Partes la consagración de sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos fundados en los principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.

DERECHO AL TRABAJO

Es de recordar al despacho que actualmente requiero de estabilidad laboral como lo es la carrera administrativa propiamente, derecho al trabajo que me están vulnerando o amenazando la Comisión Nacional del Servicio Civil y Secretaría Distrital de Hacienda.

La Sentencia SU-339 de 2011 la Corte determinó dentro del ámbito de protección del derecho al acceso a la función pública se entiende que:

“(…) (i) la posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen un cargo público.”

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que el derecho de petición es la facultad que tiene todo ciudadano de *“formular peticiones respetuosas a las autoridades y en consecuencia, obtener respuesta oportuna y completa por parte de éstas”*.

La Corte Constitucional, ha tratado en numerosas providencias lo atinente al derecho de petición, delimitando y proponiendo una serie de sub reglas que deben ser tenidas en cuenta por los operadores jurídicos al momento de hacer efectiva esta garantía fundamental.

En tal sentido, la Sentencia T-377 de 2000 estudio el núcleo esencial del derecho de petición y estableció 9 características del mismo:

*“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. **Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado** 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. (...)”.* (Resaltado para enfatizar).

Por lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría Distrital de Hacienda no resuelven, no toman acciones, no responden frente a la petición de utilizar para proveer las vacantes mencionadas, la lista de elegibles en la que me encuentro en el puesto dos (2) conformada mediante resolución 6322 del 10 de noviembre de 2021, vulnerando mis derechos fundamentales invocados, por lo tanto, y de manera urgente y transitoria, solicito al despacho lo siguiente.

III- PETICIONES

PRIMERO: CONCEDER a mi favor la tutela como mecanismo transitorio de protección a los derechos fundamentales al Debido Proceso en Concurso de Méritos, Derecho de petición, Derecho al trabajo y Acceso a la Función Pública.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Secretaría Distrital de Hacienda mi nombramiento Diana Milena Cardenas Chaparro en carrera administrativa, en vacante de cargos equivalentes no convocados, que surgieron con posterioridad a la convocatoria de concurso en la Secretaría Distrital de Hacienda, al encontrarme en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 6322 del 10 de noviembre de 2021.

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil respuesta a mi petición realizada el día 18 de septiembre de 2023 de radicado No 2023RE178732 para que haga uso de la lista de elegibles de la resolución No. 6322 del 10 de noviembre de 2021 correspondiente al OPEC 137051 Distrito Capital 4, de conformidad con las vacantes reportadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, ya que la petición lleva mas de 30 días sin respuesta y el 10 de noviembre de 2023 vence la lista de elegibles conformada en la que me encuentro en segundo lugar.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hacienda respuesta a mi petición realizada el día 17 de septiembre de 2022 de radicado No 2022ER448539O1, petición de información para cubrir vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados en la convocatoria Distrito capital 4 – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – Modalidad abierto.

SEXTO: En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez, se continúe con cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

IV - JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos no he presentado petición similar ante alguna autoridad judicial.

V - PRUEBAS

De parte, documentales:

1. Copia de mi cédula de ciudadanía
2. Copia de la Resolución 6322 de noviembre 10 de 2021 *“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer uno (1) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 21, identificado con el Código OPEC No. 137051 en la modalidad abierto del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH, Procesos de Selección 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Convocatoria Distrito Capital 4”*.
3. Petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil de radicado No. 2023RE178732 del 18 de septiembre de 2023, de la cual no me dieron respuesta.
4. Petición a la Secretaría Distrital de Hacienda de radicado No. 2023RE178732 del 17 de septiembre de 2023, de la cual no me dieron respuesta.
5. Copia de radicado No. 2023RE178732 del 17 de septiembre de 2023 del derecho de petición a la Secretaría Distrital de hacienda.

VI - COMPETENCIA

La Comisión Nacional del Servicio Civil es una autoridad pública del orden nacional y, en consecuencia, el reparto en este caso se debe hacer de acuerdo con el inciso primero del numeral primero del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual *“Las acciones de tutela que se interpongan **contra cualquier autoridad pública del orden nacional**, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura...”*

De no considerarse competente, solicito respetuosamente que de inmediato se envíe al juez competente.

VII - ANEXOS

1. Copia de la acción y sus anexos para el traslado a las accionadas y para el archivo.
2. Los documentos que se presentan como prueba.

VIII - DIRECCIÓN Y NOTIFICACIONES

Accionadas:

- **Comisión Nacional del Servicio Civil** Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co
- **Secretaría Distrital de Hacienda** Carrera 30 N° 25-90, Bogotá.
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co

Accionante:

Yo recibiré notificaciones en la dirección Cra. 27 No. 46 -10 apto 505 edificio park way reservado. Ciudad de Bogotá.

Cel: 3165370092

e-mail: dianim21@hotmail.com

Respetuosamente,

DIANA H. ARDENDO GH.

DIANA MILENA CARDENAS CHAPARRO
C.C. 63.559.014 de Bucaramanga